
Un nuevo papel para la ciudadanía: evaluación de políticas de ajuste estructural y construcción de alternativas

Emmanuelle Perrigaud*



Por la legitimación del saber local: la iniciativa SAPRI-CASA

En junio de 1995 un grupo de organizaciones de la sociedad civil (OSC) se reunió con el presidente del Banco Mundial (BM), James Wolfensohn, y le propuso que esta institución emprendiera una revisión de las políticas de ajuste estructural en colaboración con la ciudadanía organizada. De acuerdo con esta petición, se presentó una propuesta concreta encabezada por The Development GAP (Group for Alternative Policies) en colaboración con OSC de 20 países. De las negociaciones que se desarrollaron surgió la Iniciativa para la Revisión Participativa del Impacto del Ajuste Estructural (Structural Adjustment Policy Review Initiative, SAPRI).¹

Esta iniciativa responde al acuerdo conjunto entre el BM y OSC de abrir los procesos de ajuste estructural al examen y la crítica de la sociedad civil de diversos países. A este respecto, Wolfensohn expresó la necesidad de “promover medidas que reduzcan las diferencias de ingresos e inciten a los gobiernos a consultar y debatir con la sociedad civil sobre las reformas de política”. Así, se organizó la consulta internacional a través de una colaboración sociedad civil/gobierno/BM, para analizar el impacto de las políticas sobre grupos de población, sectores económicos y organizaciones sociales de diez países, así como para explorar nuevas opciones de políticas.

La iniciativa SAPRI plantea los objetivos siguientes:

- Hacer del ajuste estructural un debate público con conocimiento e insumos locales.

- Organizar una colaboración tripartita entre instituciones internacionales, gobiernos y sociedad civil.
- Construir redes internacionales de ciudadanos.
- Facilitar el acceso a la información sobre las políticas de ajuste estructural.
- Plantear una metodología innovadora y participativa para la organización de foros nacionales públicos y transparentes que permitan a los grupos marginales presentar su experiencia y desarrollar investigación participativa, valorando información tanto cualitativa como cuantitativa y desarrollando un enfoque integral de economía política.
- Asegurar al movimiento un financiamiento independiente.
- Movilizar a la sociedad civil en torno a las políticas económicas globales.

A partir de SAPRI se conformó una red con OSC de los países participantes, la Red Internacional de la Sociedad Civil para la Revisión Participativa del Impacto del Ajuste Estructural (Structural Adjustment Policy Review Initiative Network, SAPRIN). Ésta ha reunido más de 1,200 organizaciones y ha efectuado diálogos públicos nacionales e internacionales mediante investigación participativa. En particular, ha analizado el impacto de las políticas de ajuste estructural para diseñar recomendaciones que serán presentadas al BM y a gobiernos para que se impulsen cambios en los programas de ajuste económico y en los procesos de decisiones de política económica.

* Investigadora del ITESO.

Milán y Jorge Luis en *El Rapto III*, óleo sobre madera, 170 x 209 cm, 1998.



El BM y la SAPRI se plantearon como objetivo contar con representaciones de países de África, América Latina, Asia y Europa oriental. Actualmente participan Bangladesh, Ecuador, El Salvador, Ghana, Hungría, Malí, Uganda y Zimbabwe.

El BM invitó a países con economías y deudas de mayor tamaño, como México, Argentina, Brasil y Filipinas. Sin embargo, los gobiernos respectivos rechazaron esta oferta. Frente a este rechazo, diversas OSC decidieron lanzar un ejercicio paralelo a SAPRI, aun sin la participación gubernamental y, por consiguiente, sin el aval oficial del BM. Las organizaciones participantes de estos países fueron invitadas también a la red SAPRI y comenzaron a desarrollar el ejercicio de evaluación bajo las siglas CASA (Citizen Assessment of Structural Adjustment).

Esta evaluación ciudadana del ajuste estructural, CASA, se ha desarrollado sobre todo en México y Filipinas; Argentina se incorporó recientemente, y se mantienen contactos con Brasil a través de la Rede Brazil.

Desde 1997 los ejercicios nacionales SAPRI/CASA han recibido asistencia de OSC, asociaciones de campesinos, sindicatos, organizaciones de mujeres o de indígenas, movimientos ambientalistas y religiosos y de otros grupos ciudadanos que se han reunido en cada país para constituir comités directivos y técnicos de la sociedad civil, analizar temas prioritarios del ajuste para evaluarlos ante el BM y gobiernos, y para efectuar actividades de cabildeo en política económica.

Con base en una metodología participativa con la sociedad civil, el ejercicio SAPRI-CASA intenta facilitar la colaboración activa de los grupos que tradicionalmente han sido excluidos de los procesos de evaluación de las políticas. Se trata de examinar la política económica analizando las estructuras políticas, sociales e institucionales en que se basan los procesos de toma de decisiones y los impactos de las medidas adoptadas. El análisis se enfoca en la relación entre políticas, instituciones económicas y sociales intermediarias (mercados, estructuras reguladoras y legales, gobierno, etc.) y

las entidades individuales, familiares, comunitarias y sectoriales, buscando relaciones de causa–efecto entre los distintos niveles.

Algunas tendencias internacionales

En las reuniones internacionales se han organizado plataformas públicas donde representantes de OSC presentan sus experiencias y la interpretación de los efectos de las políticas de ajuste, así como algunos de sus instrumentos particulares. En la mayoría de los países se han señalado las políticas de liberalización comercial, precios y sectores financieros y agropecuarios como temas que preocupan, al igual que las políticas de privatización, las reformas de mercado de trabajo, la desregulación de la inversión extranjera, los recortes del gasto público y el costo asumido por la sociedad.

Diversos participantes anticiparon una serie de relaciones causa–efecto asociadas a las políticas de ajuste estructural. Se mencionó, por ejemplo, que:

- Las políticas de privatización han incrementado la inseguridad en el empleo, el desempleo y el deterioro de los derechos laborales.
- Se ha flexibilizado el mercado de trabajo y han bajado los salarios, lo que genera mayor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza.
- Las políticas de liberalización han tenido un impacto negativo sobre la producción agrícola y el sector rural, las mujeres y los trabajadores sin formación, así como sobre las pequeñas y microempresas por falta de fortalecimiento de la industria local.
- Se ha inducido al alza el costo de los servicios, al tiempo que se reduce la calidad de los mismos.
- Las reformas de política fiscal, los recortes en el gasto público y el aumento de los impuestos han reducido el acceso de los grupos más pobres y marginales a servicios de salud, educación y vivienda decentes.

La experiencia CASA–México

En México se lanzó el ejercicio CASA junto con redes nacionales de ciudadanos. La iniciativa original fue asumida por Equipo Pueblo y participaron, además, el Foro de Apoyo Mutuo, Red entre

Mujeres, Convergencia, Observatorio Social, Red Mexicana de Cabildeo por el Desarrollo y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Para su desarrollo se contó con el apoyo del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro a la Infancia (UNICEF), Novib (agencia holandesa) y Oxfam Gran Bretaña.

Para realizar esta evaluación se organizaron talleres con OSC, en los que se generó un espacio de análisis participativo sobre el contenido de las políticas de ajuste, así como lo que se hace y se piensa en los grupos sociales con respecto a las mismas. Así, se efectuaron ejercicios de análisis sobre los cambios en los niveles de bienestar de los grupos sociales, sectores y regiones en que participan las OSC, con el fin de articular la explicación de tales cambios con la aplicación de las políticas de ajuste estructural y los programas sociales. En otras palabras, esta etapa incorporó un ejercicio demostrativo sobre los comportamientos sociales y económicos de una población concreta ante los cambios generados por la estrategia económica.

El objetivo preciso de estos talleres fue relacionar las políticas económicas aplicadas durante los últimos 20 años con los cambios en las condiciones de vida, el empleo y la distribución del ingreso. Además del intercambio y del análisis de información cuantitativa y cualitativa con OSC, se han promovido procesos de organización social tanto para la toma de posturas en torno a las políticas actuales como para el diseño de propuestas propias que puedan ser discutidas política y socialmente.

La metodología aplicada en los talleres se definió conjuntamente con el proyecto de investigación “Empleo, pobreza y distribución del ingreso en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit: articulación entre las estrategias de desarrollo económico y los niveles de bienestar social”,² que analiza el impacto del ajuste sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares en el plano regional de los estados considerados. Para el desarrollo de la investigación se plantearon tres etapas de trabajo:

- Un análisis de los fundamentos lógicos e históricos de las políticas de ajuste; su traducción en estrategias económicas por parte de las instituciones financieras internacionales, y su concreción en políticas económicas nacionales.
- El estudio de la evolución de las condiciones socioeconómicas en la región de interés espe-

cífico para el proyecto, con base en información documental.

- El trabajo de campo con OSC y población abierta (mediante talleres y encuestas) sobre sus cambios socioeconómicos, las razones de los mismos y las estrategias seguidas ante éstos.

Por su parte, los talleres se diseñaron para ser efectuados en tres módulos, cada uno de ellos en cuatro ciudades del país: Chihuahua (taller Norte), Guadalajara (taller Occidente),³ México (taller Centro), Oaxaca (taller Sur).

El primer módulo tuvo como objetivos ubicar la problemática y evolución de los sectores económicos, espacios geográficos de incidencia y grupos sociales en que se insertan dichas OSC; detectar las razones que perciben sobre el origen de los cambios descritos, y ubicar las estrategias desarrolladas por estas mismas organizaciones para aprovechar o hacer frente a tales cambios.

En el segundo módulo se analizaron propiamente las políticas de ajuste estructural, su origen, significado y las posibles incidencias en los sectores, regiones y grupos sociales de las OSC participantes en el taller. También se abordaron las metodologías para el diseño de propuestas y políticas alternativas, así como experiencias concretas al respecto.

Por último, en el tercero se presentaron la discusión y elaboración de metodologías y propuestas concretas a nivel macro para la construcción de alternativas dentro y ante el ajuste estructural, construidas a partir del debate con las propias organizaciones.

Resultados de los talleres⁴

El objetivo de los talleres fue discutir sobre el impacto de las políticas de ajuste estructural en las áreas de producción (en especial el sector agropecuario), empleo y bienestar social (educación, salud, vivienda, seguridad alimenticia y seguridad social).

Las organizaciones consideraron que las políticas que han generado mayores impactos en esas áreas son la reorientación del gasto público, la intervención del estado en la economía, la liberalización comercial y financiera y las reformas del mercado de trabajo (aunque en sentido estricto no se presentaron modificaciones legales significativas al respecto).

Primer módulo: planteamiento de problemáticas y análisis de los problemas

Panorama nacional⁵

Primero se expondrán las percepciones de los representantes de OSC conforme a sus convicciones y experiencias; por ello ciertas afirmaciones no coinciden con las evaluaciones realizadas con base en estudios documentales.

Impacto de la reducción del gasto público sobre los sectores rural y agropecuario

Las OSC participantes en el ejercicio se enfocaron en las consecuencias del cambio en el papel del estado (recortes en los gastos públicos, retiro de los subsidios y privatización del sistema de tenencia de la tierra) en dos áreas generales: la producción agropecuaria y el medio rural en general, y las condiciones de vida de la población de bajos recursos. Subrayaron el deterioro paulatino de las condiciones de vida de la población rural y la polarización social creciente generada por la liberalización de los mercados y la reducción del apoyo del estado al sector agropecuario. Entre estas medidas se incluyen: la eliminación de los precios de garantía de los cereales, el retiro de los subsidios a los insumos productivos, el incremento de las tasas para los servicios públicos, la privatización de las empresas públicas que proveen servicios al sector agropecuario y la modificación de la Constitución y la nueva legislación agraria que permite la privatización de la tierra dentro del sistema ejidal mediante la renta o venta de ésta.

Los participantes indicaron que esas medidas han generado el incremento de importaciones de granos y el desmantelamiento del sistema de producción agrícola y agroindustrial, provocando con ello la reducción de las oportunidades de empleo en dichos sectores. Campesinos y pequeños agricultores han sido los más afectados por tales políticas pues sus costos de producción subieron al mismo tiempo que bajaban los precios relativos de los productos. Los participantes expresaron su preocupación por la falta de seguridad alimenticia, dado que la producción en pequeña escala se volvió menos viable. En relación con estos problemas, la reforma de la ley agraria incitó a los campesinos a dejar sus parcelas para buscar empleo en otros lugares. Por consiguiente, aumentó el desempleo (aunque correspondería sobre todo

referir el subempleo), y con ello la pobreza en zonas rurales. En conclusión, se señaló que las políticas de ajuste expulsaron una parte de la población rural de sus tierras. Esto favoreció la migración rural (jornaleros agrícolas) a las ciudades y a Estados Unidos y exacerbó la tendencia al uso no sustentable de los recursos naturales y la degradación ambiental.

Los participantes afirmaron que los programas sociales no han tomado en cuenta a los grupos de población más necesitados. Con esta afirmación contradicen que los programas nacionales contra la pobreza, como el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá), fueran diseñados precisamente para dar apoyo a la población que vive en pobreza extrema y no para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general. Los participantes añadieron que estos programas fueron utilizadas con fines políticos, creando conflictos dentro de las comunidades y entre familias, y no satisficieron las necesidades básicas de los más pobres.

Entre las percepciones de las organizaciones consultadas se mencionan las afectaciones que han sufrido los grupos sociales que no han sido considerados estadísticamente como en extrema pobreza pese a la precariedad en que se encuentren. Así, se cuestiona que las políticas fiscales hayan incluido el retiro de subsidios a productos alimenticios como leche y tortilla y los aumentos de precios de los productos y servicios básicos, así como nuevos impuestos sobre alimentos y medicinas, lo que ha causado más dificultades a los sectores de población de escasos recursos. Al respecto cabe señalar que los subsidios se han trasladado vía desayunos escolares y complementos de ingreso a las familias en extrema pobreza pero no alcanzan para los grupos populares que antes recibían los beneficios de la política social. Por otra parte, se advierte el temor ante eventuales decisiones económicas aún no tomadas. Por eso se denuncian los efectos perniciosos que podrían tener nuevos impuestos sobre alimentos y medicinas (extensión del IVA), aunque tales medidas no han sido adoptadas.

Los participantes insistieron sobre todo en las mujeres, los niños y los indígenas como los grupos de población más afectados, y en la insuficiencia de los servicios de salud y educación causada por la reducción del presupuesto público destinado a estos fines.⁶

Impacto de la liberalización del comercio y del sector financiero en las pequeñas empresas y productores rurales

Entre los temas que más abordaron los participantes figura la liberalización comercial y arancelaria a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha orientado la economía al incremento de las exportaciones en detrimento del mercado interno, que resulta afectado con la eliminación de las barreras estructurales y facilita la libre circulación de capital, inversión, productos y servicios. En las negociaciones del TLCAN fueron adoptadas políticas de liberalización que permitieron al capital extranjero el pleno acceso a los sectores económicos que tradicionalmente habían estado protegidos, mientras que la producción nacional, en particular la de las pequeñas y medianas empresas, resultó perjudicada por nuevas cargas impositivas. Las reformas fiscales incluyeron la supresión de los controles sobre las tasas de interés, la privatización y desregulación de los servicios financieros y una drástica reducción del crédito otorgado por el estado.

Muchas pequeñas y medianas empresas no resistieron la competencia extranjera debido a la superioridad tecnológica de las empresas transnacionales y a las ventajas fiscales que se les dieron, así como por las dificultades de las pequeñas empresas mexicanas para acceder al crédito.

Los efectos negativos del TLCAN son particularmente preocupantes en zonas rurales. Los participantes en la reunión subrayaron la imposibilidad de los productores mexicanos de competir con agricultores estadounidenses en parte porque estos últimos reciben subsidios gubernamentales. Los pequeños productores resultaron afectados por la reorientación de los créditos para ser destinados a la producción en gran escala intensiva en capital orientada al mercado internacional. Según los participantes la liberalización de los mercados financieros no ha favorecido a los agricultores orientados al mercado interno porque sus activos no son lo suficientemente rentables. Así, gran parte de la población rural se quedó sin acceso al ahorro ni al crédito.

Impacto de la reforma del mercado del trabajo en el empleo, las condiciones de trabajo, los ingresos y las familias

Los participantes expresaron su rechazo a la flexibilización del mercado de trabajo, que concede al

*Arlene sobre el puente Chone (según Buiñuel),
óleo sobre madera, 130 x 163.5 cm, 1998.*



Puente Chone. Ferrocarril Nacional. 1890.

patrón determinar en forma unilateral las condiciones de contratación (tal reforma en realidad no ha tenido lugar, pero en los hechos es innegable que existe una flexibilización como la señalada por ellos). Lo anterior se ha traducido en el incremento del trabajo a tiempo parcial, los contratos temporales y la falta de prestaciones. Por consiguiente, la flexibilización ha significado el debilitamiento de los derechos y el deterioro de las condiciones laborales, y ha redundado en el desconocimiento de los sindicatos y las convenciones colectivas. Se dijo, por ejemplo, que se niegan a la trabajadora días de incapacidad por maternidad o enfermedad y que se despide a mujeres embarazadas para no pagarlos, y también se evade el pago de horas extras.

Las políticas de ajuste han establecido toques al incremento de los salarios por debajo de la inflación, tendencia que se acompañó de la cada vez más desigual distribución del ingreso. Además, el problema de empleo se exacerbó debido a los despidos masivos que siguieron a la privatización de empresas públicas y a la quiebra de miles de pequeñas y medianas afectadas por la liberalización del comercio y la inversión.

Se subrayaron los impactos de las políticas en los hogares, así como la dificultad creciente de las

familias para mantener su estabilidad laboral. Aun quienes lo logran se quejaron de recibir salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia. Las más de las veces muchos toman un segundo trabajo en el sector informal. Estas soluciones significan una mayor jornada laboral, inestabilidad en el empleo e inseguridad en los ingresos.

Entre las alternativas desarrolladas por las familias de escasos recursos está la incorporación al mercado de trabajo de otros miembros del hogar (mujeres, niños y ancianos) o la emigración hacia los centros urbanos o a Estados Unidos. Tales mecanismos generan cambios notables en la sociedad y en la estructura familiar, creando nuevas dificultades para las mujeres y los menores de edad. En muchos casos las familias no pueden mantener a los hijos en la escuela por los altos costos del material que necesitan.

Las prolongadas jornadas laborales de ambos padres dejan a los hijos sin atención, y la falta de ésta, combinada con tensiones intrafamiliares por insuficiencia económica —agravada por las crisis económicas ocurridas durante el ajuste— genera problemas sociales de violencia y delincuencia juvenil. Los participantes subrayaron al respecto que las mujeres han sido las más afectadas por la flexibilización.

Resultados de los talleres Occidente

Los participantes en los talleres de la zona Occidente (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro) periodizaron sus experiencias sociales en las siguientes etapas:

1980-1984, primeras señales de cambio en un periodo de supuesta estabilidad

De acuerdo con la percepción de las OSC participantes, el periodo 1980-1984 se caracteriza por las condiciones de desarrollo aceptables en su inicio.⁷ La producción del sector agropecuario se destina al autoconsumo y al mercado nacional. Los campesinos y obreros no tienen dificultades para encontrar trabajo. A pesar de las desigualdades regionales y de las deficiencias en los servicios, la población tiene acceso a los servicios de salud, educación y vivienda. Sin embargo, se notaron las primeras transformaciones en las actividades productivas, en particular la introducción de nuevas tecnologías en el campo, que provocan los primeros despidos y la aceleración de las jubilaciones.

En cuanto a la organización social, este periodo presenta poca participación social. Los obreros no actúan de manera activa en los sindicatos, generalmente sometidos a los intereses del gobierno. No obstante, las OSC identificaron los principios de la creación de organizaciones civiles defendiendo intereses tanto rurales como urbanos.

Conviene destacar que entre más lejano esté el periodo de referencia se detectan mayores imprecisiones en la información recibida. Al menos de 1982 a 1984 la situación nacional fue extremadamente complicada (devaluaciones, hiperinflación, duplicación del desempleo en un año, etcétera).

1985-1989, crisis laboral y cambios sociales

Según las OSC participantes, hubo importantes transformaciones económicas y sociales a partir de 1985. Los participantes aludieron en particular al principio de la política de liberalización económica a raíz de la incorporación de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, aunque los precios y la calidad de los productos mexicanos no tuvieron competitividad en el mercado internacional.

El sector obrero enfrenta una crisis laboral caracterizada por el estancamiento de los salarios, la limitación de las prestaciones mínimas, los recor-

Cuadro 1
Perfil de las OSC participantes en los talleres Occidente

Sector	Grupos sociales representados
Desarrollo social	<ul style="list-style-type: none">• Comunidad• Familias• Tercera edad• Mujeres• Niños
Desarrollo local y ciudadano	<ul style="list-style-type: none">• Sociedad civil
Producción	<ul style="list-style-type: none">• Sector agropecuario: producción de maíz, tabaco y caña de azúcar• Agroindustria• Pesca• Industria• Comercio• Turismo
Empleo	<ul style="list-style-type: none">• Campesinos y jornaleros• Obreros• Pequeños empresarios

Nota: Al final de este trabajo aparece una lista de las OSC que asistieron a los encuentros de la región Occidente.

tes del contrato colectivo, los despidos y la nueva competencia por el empleo. En cuanto a la calidad de vida, los participantes insistieron en su deterioro, que se manifiesta en el aumento del número de niños y niñas en la calle, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción.

En este contexto, sindicatos y centrales obreras y campesinas no responden a las demandas de sus asociados, lo que genera la necesidad de formar nuevos tipos de organizaciones con capacidad de propuesta frente a las problemáticas tanto del sector agropecuario como de la industria.

1990-1993; liberalización de la economía y retiro del estado de ella

Las transformaciones experimentadas en el periodo anterior se institucionalizan. En lo que se refiere al sector agropecuario, la liberalización económica y la prioridad a la exportación traen consigo nuevas condiciones de producción. Las reformas al artículo 27 constitucional modifican la tenencia de la tierra de manera que las grandes empresas agroindustriales exportadoras pueden acceder a grandes extensiones de tierra. Así, cambian las actividades productivas a favor de cultivos como el aguacate en Michoacán, la fresa o el jitomate en la ribera de Chapala, los camarones en los municipios de San Blas y Rosamorada (Nayarit). En cam-

bio, disminuye el cultivo de granos básicos para el consumo nacional (maíz, frijol y verduras), más aún cuando disminuye la participación de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y se reducen —luego desaparecen— los precios de garantía que favorecían al productor.

Estos cambios en la producción, institucionalizados a raíz de la firma del TLCAN, creó nuevas exigencias de competitividad, productividad y calidad que los campesinos no pueden cumplir. El sector forestal, por ejemplo, no puede competir ante productos procedentes de Estados Unidos, Colombia, Chile o Brasil, y lo mismo ocurre con la producción de jitomate y chile.

Además, la baja en los precios de productos agrícolas no les permite pagar los préstamos que habían contratado, con lo que crece la cartera vencida y se deteriora el nivel de vida rural. Por ejemplo, entre los productores de tabaco de Nayarit disminuye el consumo de carne de tres a sólo una vez por semana. En este contexto se facilita la constitución de monopolios nacionales y extranjeros. Los campesinos se ven obligados a emplearse como obreros agrícolas de las grandes empresas, mismas que contratan mano de obra femenina. Así, en ciertos municipios de Nayarit y Michoacán crece el trabajo agrícola femenino.

En el medio urbano la política de liberalización económica se traduce en la privatización y el cierre de empresas del sector público y en la quiebra de pequeñas y microempresas que no pueden competir en un mercado desprotegido. Por lo tanto, aumentan el subempleo y el empleo informal. Para enfrentar el deterioro de la situación económica de sus hogares, las mujeres se emplean en maquiladoras o se insertan en el sector informal participando en el pequeño comercio. El ingreso de la mujer al mercado de trabajo provoca un reacomodo de los papeles en la familia determinados por una sociedad de tradición machista.

En zonas deprimidas de los ámbitos rural y urbano la necesidad de recursos adicionales fomentó la migración a Estados Unidos o a las regiones exportadoras del país.

En cuanto a la calidad de vida, las OSC insistieron en el aumento del costo y deterioro de los servicios de salud y educación por falta de una política eficiente. Asimismo, la baja del poder adquisitivo dificulta el acceso a la alimentación saludable y a la vivienda. Se señalaron también los problemas de inseguridad pública y el incremento de las actividades delictivas. Frente a las dificulta-

des sociales mencionadas, los programas compensatorios como el Pronasol permitieron mejorar los servicios en ciertas comunidades de Jalisco.

El deterioro del medio ambiente es otro de los temas que preocupan a los participantes, quienes lo relacionaron con las transformaciones del sector productivo, la desregulación y la falta de vigilancia, la corrupción y la utilización masiva de fertilizantes químicos.

1994-2000, desde la crisis económica hasta hoy

Las OSC coincidieron en mencionar que la crisis de 1994 afectó la estructura de producción y el empleo. Se deterioran las condiciones laborales debido al proceso general de flexibilización que se plantea para responder a las exigencias del mercado global competitivo, que incluye modificaciones contractuales, intensificación de los ritmos de trabajo, contención de salarios y violación de derechos laborales consagrados en la Constitución. En los ámbitos de la industria y el comercio sigue creciendo el sector informal por la incorporación del trabajo infantil, femenino y de la tercera edad.

Las OSC no sólo mencionaron el impacto de la crisis sino que refirieron factores estructurales como causas de los problemas sociales presentes (dificultades económicas de los hogares, aumento de la población sin acceso a los servicios básicos, deterioro de la cohesión familiar y desintegración de la sociedad civil). Entre tales factores ubican el fin del estado benefactor y la instauración de una política sin sentido social. Entre los cambios iniciados a principios de los noventa destacaron el otorgamiento selectivo de apoyos sociales, la mercantilización de los servicios públicos, así como la limitación de los servicios de salud y educación y el aumento de sus costos.

Ante los cambios económicos y sociales, la movilización ciudadana

Ante los cambios mencionados, la sociedad civil inicia su movilización y organización en figuras asociativas seculares o religiosas de carácter social o profesional con el fin de buscar en forma colectiva estrategias para superar los problemas.

Se constituyen OSC para asegurar las funciones antes asumidas por el estado (programas de alfabetización y educación abierta adaptados a las características socioeconómicas de la población local, por ejemplo). En el sector productivo se fortale-

Cuadro 2
Percepción de los participantes del taller Occidental sobre el ajuste estructural

Pregunta	Respuesta
¿Qué se entiende por ajuste estructural?	Una serie de medidas destinadas a influir en un modelo de desarrollo y tomadas por el gobierno mexicano sin la participación de la ciudadanía para responder a las demandas y presiones de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
De la estructura que caracterizaba a México en los años ochenta, ¿qué es lo que ha cambiado?	Pasamos de un estado benefactor a un estado neoliberal, es decir, de un estado que protegía a la industria nacional y proporcionaba seguridad social a un estado que promueve el libre mercado y el capitalismo descuidando la protección de los ciudadanos.
¿Por qué se ha ajustado la estructura?	Por una voluntad extranjera frente al problema de reembolso de la deuda, para hacer de México un país maquilador bajo la lógica de las ventajas comparativas en el mercado global.
Con la estructura actual, ¿hay algo que habría que cambiar?	El modelo de desarrollo para que sea viable con mayor consenso y orientación social.

cen organizaciones sectoriales. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), por ejemplo, se encarga de la gestión de créditos, de la planeación, de las cajas de ahorro, de la asesoría técnica y legal y de la interlocución política. En el caso de los tabacaleros se constituye la Asociación Rural de Interés Campesino (ARIC) como instancia negociadora con las grandes empresas. A partir de 1997 se impulsa un movimiento de sindicalización de jornaleros. No obstante, la corrupción y el corporativismo que permean la vida sindical y política en México limita la independencia de las organizaciones. Frente a las dificultades para acceder a los créditos y ante las deudas, se crean sistemas financieros paralelos al sistema bancario formal (cajas de ahorro comunitarias, cooperativas, etc.) y se multiplican iniciativas comunitarias tales como las microempresas. Muchos de esos proyectos se dirigen a mujeres, lo que permite fortalecer su papel productivo. Sin embargo, varias iniciativas fracasan por falta de estudios de mercado y de capacitación de las mujeres.

Segundo módulo: los fundamentos de las políticas de ajuste estructural

Introducción a las políticas de ajuste estructural

En los talleres Occidente del primer módulo las OSC analizaron los cambios en las condiciones de empleo y de vida, refiriéndose principalmente al modelo de desarrollo económico que han seguido los gobiernos sucesivos durante las dos últimas décadas. Aunque insistieron en las consecuencias

de la entrada de México al libre comercio, no aludieron a las políticas de ajuste estructural planteadas en el ámbito internacional. El objetivo del segundo módulo fue precisamente introducir la noción de ajuste estructural con el fin de dar a los participantes otra perspectiva de la política económica y nuevos elementos para el análisis de los cambios y problemas que subrayaron en cuanto a su situación económica y social. Por ello, se hizo un primer ejercicio con el objetivo de recoger la percepción de los participantes sobre el ajuste estructural (véase el cuadro 2).

Una vez obtenidas las percepciones iniciales acerca del ajuste estructural, se presentó un material didáctico. A través del video titulado *El desbarajuste en México: dos décadas de ajuste estructural*,⁸ se presentaron a las organizaciones la historia y fundamentos principales de estas políticas. Posteriormente se profundizaron, mediante una exposición del comité organizador, los elementos que sustentan estas medidas económicas.⁹

En primer lugar fueron presentadas algunas concepciones económicas de los fundamentos en que se basan los ajustes, luego se abordaron las causas que las instituciones financieras le atribuyen a las crisis de los países deudores y las soluciones que proponen, y al final fueron explicados los instrumentos específicos de ajuste diseñados por las instituciones financieras internacionales.

Posteriormente se relacionaron las políticas con problemas concretos que enfrentan los grupos sociales, las regiones y los sectores con que participan las OSC. Se subrayaron los casos de Cuquío (impacto de políticas agropecuaria, crediticia, de tipo de cambio y de liberalización externa) y de la

colonia Jardines de la Cruz de Guadalajara (desregulación, política laboral y de salud).

El objetivo de la reflexión fue enfatizar las relaciones señaladas, así como las acciones de la comunidad ante los efectos percibidos. Aunque las organizaciones participantes expresaron su idea de ajuste estructural, no lograron relacionar éste con fenómenos concretos de su ambiente inmediato. Por consiguiente, no se elaboran proyectos vinculados a las políticas en sí mismas, sino para resolver un problema concreto del ámbito local o regional.

Dos iniciativas ante al ajuste estructural

Con el objetivo de que las organizaciones entendieran con mayor claridad las estrategias instrumentadas ante las políticas de ajuste estructural, se pidió a representantes de dos OSC que expusieran sus respectivas experiencias a manera de ejemplos. La primera organización presentó un caso de administración y gestión colectiva y participativa —que incluye autoridades y comunidad en general— para el desarrollo municipal; la segunda propuso a las organizaciones sociales una metodología para el diseño de políticas públicas y la construcción de un poder ciudadano.

El caso Cuquío

A principios de los años ochenta Cuquío era un municipio presionado por el agiotismo,¹⁰ la falta de crédito, el acceso limitado a la tierra, se destinaban partes crecientes del ingreso al consumo de básicos por los altos precios, el rezago en la dotación de infraestructura social y el autoritarismo gubernamental. A partir de 1992 se instauró un sistema de planeación participativa de la política municipal con actores del desarrollo tanto del mercado como de la sociedad civil. Por lo tanto, la ciudadanía, organizada en comités y asesorada por consejeros, pudo incidir en la política pública municipal en la toma de decisiones junto con el gobierno para que se realizaran obras necesarias para la comunidad. Ello favoreció la constitución de organizaciones campesinas, de mujeres y de jóvenes, sociedades de producción rural y cooperativas de consumo. Cada una de éstas elaboró proyectos para la regulación de la producción y del consumo y la creación de micro y pequeñas empresas.

Así, la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía permitió instrumentar un sistema eficiente de gestión y aplicación de los recursos públicos,

lo que facilitó la elevación del nivel de vida, aprovechando socialmente elementos del libre mercado que sin tales alternativas hubieran sido dañinos.

Agenda Ciudadana

La iniciativa de construcción de agendas ciudadanas nació en 1999 por representantes de OSC y académicos con el objetivo de: generar nuevas formas de relación gobierno—ciudadanía en los ámbitos municipal, estatal y nacional, renovando y creando mecanismos de participación institucional de la toma de decisiones públicas; fortalecer la capacidad propositiva y vigilante de los ciudadanos frente a la gestión gubernamental, y construir un poder ciudadano con un proyecto político alternativo y la colaboración activa en el diseño, aplicación y evaluación de los planes de desarrollo estatales y municipales de los programas y presupuestos de los tres niveles de gobierno.

Para lograrlo se planteó la articulación de acciones de las OSC con una movilización propositiva de la ciudadanía para elaborar una “agenda mínima”, llamada Agenda Ciudadana, que concentra las demandas prioritarias y las propuestas de los ciudadanos para enfrentar sus principales problemas. Éstas se refieren a la reforma democrática del estado, la participación ciudadana, la recuperación del campo, la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos económicos y políticos. En la esfera económica, el movimiento sugiere la elaboración de una nueva estrategia, el replanteamiento de la integración del país a la economía mundial por medio de la revisión de los tratados de cooperación internacional, la incorporación de la visión del desarrollo regional integral y sustentable, la elaboración de una reforma del sistema financiero y una reforma fiscal integral y progresiva, y la detención de las privatizaciones nuevas y en proceso.

Tercer módulo: metodologías para la construcción de alternativas frente al ajuste

Las iniciativas de Cuquío y Agenda Ciudadana constituyen ejemplos de avance y formulación de propuestas. En este módulo se desarrollaron y analizaron dos metodologías complementarias para el diseño de alternativas de participación dirigidas a la construcción de un modelo alternativo de acción pública. La primera se basa en el cabildeo a

partir de la capitalización de las experiencias de las OSC, mientras que la segunda se enfoca en el análisis de las políticas.

Partir de la experiencia de las OSC¹¹

En el ejercicio CASA se consideran “alternativas al ajuste estructural” las acciones que promuevan la construcción de un modelo de desarrollo distinto al actual a partir de la idea de que el cambio de modelo socioeconómico sólo es posible si se modifican las políticas macroeconómicas.

Sistematización de propuestas alternativas

Para concretar las propuestas, la primera etapa consiste en el análisis y la sistematización de las acciones de las OSC. De este ejercicio resulta que las preocupaciones de las OSC y las acciones que han emprendido se ubican en dos planos: la búsqueda del cambio de una situación precisa y las estrategias de incidencia y movilización social. De acuerdo con esto, el ejercicio CASA considera dos componentes: la construcción de alternativas, y para su realización, las políticas de movilización social y de cabildeo.

Para la construcción de alternativas se elaboró la caracterización siguiente:

- Las alternativas que plantean acciones que no pueden desarrollarse con la política actual y que implican plantear nuevas formas de relación.
- Las alternativas que buscan contrarrestar los efectos de las políticas de ajuste estructural, que por lo general están planteadas en la lógica del ajuste (estrategias de supervivencia de los grupos excluidos, por ejemplo).
- Las alternativas que buscan aprovechar los “intersticios” del modelo global. Éstas pueden ser acciones locales o sectoriales que funcionan en contextos específicos.

El trabajo de investigación participativa realizado en los talleres y la revisión de los estudios sobre alternativas de política socioeconómica permitieron desarrollar un esquema preliminar de los temas que se deben abordar en la construcción de propuestas alternativas. Este esquema mantiene las dos variables centrales del proceso investigativo para la evaluación del ajuste estructural: la evolución de la producción y el empleo y el cambio de la calidad de vida. En este sentido el trabajo incorpora reformas macroeconómicas globales y en el ámbito nacional en las cuatro direcciones siguientes:

- Resolver el problema del sector externo puesto que una estrategia alternativa de desarrollo no puede seguir basándose en el endeudamiento.
- Reformar la política de inversión extranjera.
- Buscar nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo.
- Redefinir el papel del estado y de la sociedad civil.
- Fortalecer la política social.

Estrategias de cabildeo¹²

El cabildeo es el conjunto de actividades que se organizan para influir en la toma de decisiones. Para ello se necesita enmarcarlas en el diseño de una agenda propia —sustentada en o apoyada por grupos de base o sociales— y en el diseño de estrategias de organización, movilización, denuncia, negociación, confrontación y difusión, por ejemplo. Una agenda se compone de un conjunto de propuestas —Agenda Ciudadana, Cuquío— que atienden de lo inmediato local hasta una proyección de carácter estratégico que se persigue.

El cabildeo es importante por tres razones fundamentales: porque las organizaciones sociales y ciudadanas deben conocer una propuesta metodológica que les permita promover sus propuestas; porque es interesante socializar la experiencia de las organizaciones sociales y ciudadanas en el impulso de propuestas alternativas; porque deben conocer las formas a través de las cuales se puede incidir o influir en los organismos financieros y en las autoridades mexicanas que toman decisiones de política económica, con el fin de lograr con visiones más justas para el desarrollo equitativo o igualitario.

Existen diversas formas de planificar una estrategia de cabildeo. Una de ellas es a través de las etapas y actividades mostradas en el cuadro 3.

Partir del análisis de las políticas públicas vigentes¹³

De la insatisfacción primaria a la insatisfacción reflexiva

Se planteó como principio que la idea misma de alternativa supone la existencia de una actitud de insatisfacción hacia las políticas públicas vigentes. Existen varios grados de insatisfacción, y cada uno de ellos genera un tipo de reacción frente a las instituciones políticas:

- Primero la insatisfacción primaria, que se debe a la desconfianza de las OSC hacia los operado-

Cuadro 3
Planeación de una estrategia de cabildeo

Etapas	Actividades
1. Definición del problema	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitación • Características • Dimensiones
2. Definición de objetivos e indicadores	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivos concretos, medibles y alcanzables con los recursos de que se dispone • Indicadores adecuados para medir los objetivos planteados y los recursos disponibles
3. Análisis de actores	<ul style="list-style-type: none"> • Ámbitos en los que existe capacidad para lograr el objetivo • Personas u organizaciones cercanas al blanco con capacidad de incidir sobre él • Personas u organizaciones que se verían afectadas favorable o negativamente si se alcanzara dicho objetivo
4. Estrategias	<ul style="list-style-type: none"> • Formulación de argumentos adecuados para convencer a cada uno de los actores • Definición de las medidas de presión y negociación • Diseño y aplicación de estrategias selectivas para cada uno de los actores
5. Plan de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de los pasos y tiempos a seguir
6. Monitoreo y evaluación	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación y corrección de cada etapa.

res de la política pública por su pertenencia a un partido político o por su papel en la escena internacional; se manifiesta por un rechazo radical al diálogo.

- La insatisfacción ideológica se convierte también en el rechazo inmediato al diálogo, sin análisis previo de la propuesta, por divergencias en cuanto a la manera de concebir el mundo. Por ejemplo, el proyecto de ley a favor del cobro del IVA en medicinas y alimentos generó una protesta inmediata. No se consideraron los matices que podría tener dicha medida, por ejemplo que se gravara sólo alimentos para sectores de altos ingresos o medicamentos caros y superfluos y se utilizara como un posible instrumento para remediar la falta de recursos del estado. Un instrumento no necesariamente mal visto en un contexto global. En este caso habría que examinar la propuesta como parte de una política fiscal que aplique impuestos adicionales redistributivos o de una política salarial que cubriera el incremento de precios.
- A la diferencia de lo anterior, la insatisfacción hipotética no se traduce en un rechazo radical y permite la formulación de hipótesis para el análisis de la propuesta.
- La insatisfacción reflexiva es más constructiva todavía pues permite hacer el análisis detallado de la propuesta a través del examen de

varios elementos: el marco global, los objetivos, los instrumentos, las condiciones presupuestales o los recursos humanos previstos. Sólo una parte de los elementos que constituyen la propuesta pueden resultar inadecuados, lo que necesita una revisión de la medida y no su rechazo inmediato.

La elaboración de propuestas alternativas constituye un primer ejercicio de análisis de los obstáculos de conocimiento generados por el tipo de insatisfacción para convertirlos en guía de conocimiento. Si no es posible superar una insatisfacción primaria o ideológica, las posibilidades de plantear políticas alternativas se reducen.

Una vez identificado el grado de insatisfacción, se analizaron las políticas vigentes para detectar elementos que se juzgan insuficientes o no pertinentes. Sólo a partir de las conclusiones de este ejercicio es posible diseñar propuestas de política pública, que también deberán sujetarse a un proceso metodológico similar —por lo tanto crítico— al expuesto con respecto a las políticas vigentes, como puede apreciarse en el cuadro 4.

Propuestas concretas de acciones de las OSC

Una vez presentadas las metodologías para la construcción de alternativas, se hizo un ejercicio de

Cuadro 4
Análisis de las políticas vigentes y planteamiento de propuesta

Metodología	
Análisis de la política vigente	Planteamiento de la propuesta
1. Identificación de la política exacta y examen de los documentos oficiales en que se sustenta	1. Identificación de la propuesta de política
2. Planteamiento y análisis de: <ul style="list-style-type: none"> • Los objetivos explícitos • La estrategia central de la política y sus criterios (equidad en términos de género, eficiencia económica, etc.) • Las metas • Los criterios que se plantean para alcanzar el objetivo a través de la estrategia indicada¹⁴ • Los instrumentos políticos, financieros, humanos y organizativos¹⁵ que permiten evaluar la coherencia de la política en relación con las metas, los criterios, la estrategia y los objetivos • Los métodos e instrumentos de evaluación propuestos • La relación de la política pública con el resto de las políticas públicas¹⁶ 	2. Planteamiento de: <ul style="list-style-type: none"> • Los objetivos • La estrategia central y sus criterios¹⁷ • Las metas medibles para alcanzar el objetivo a través de la estrategia indicada • Los resultados posibles y los deseables • Los instrumentos (presupuesto, recursos humanos, recursos financieros reales y potenciales, etc.), y el análisis de correlación de fuerzas • Los instrumentos de evaluación • La relación de la propuesta con el resto de la política • Revisión de la coherencia general de la propuesta
3. Seguimiento y análisis de la ejecución de la política pública planteando el beneficio de la duda	3. Planteamiento de los elementos centrales que se deben vigilar en la aplicación de la política pública
4. Análisis de los resultados directos (buscados) e indirectos (efectos laterales) ¹⁸	4. Análisis de los resultados directos e indirectos
5. Planteamiento de la conclusión final	
6. Planteamiento de la política pública alternativa a partir de lo que se considera incongruente o mal planteado	

construcción de propuestas y detección de los problemas encontrados por las OSC presentes.

Se analizó, entre otros, el problema de los bajos salarios de los trabajadores indígenas en Jalisco. El objetivo general de la propuesta en este caso es revertir la política social compensatoria e integrarla en una política económica de fomento productivo autogestionario.

En términos generales, no se hicieron propuestas concretas de políticas frente al ajuste en virtud de la perspectiva macroeconómica y macrosocial que implica la necesidad de avanzar en las metodologías y de continuar analizando circunstancias específicas y formas de encontrar soluciones. La tarea ahora es avanzar en la capacidad propositiva de las organizaciones y en sus esfuerzos por construir y cabildear alternativas.

Conclusión

Iniciado a mediados de la década de los noventa, el ejercicio SAPRI/CASA refleja una tendencia reciente a la constitución de iniciativas ciudadanas y al reconocimiento de la sociedad civil como actor de la política económica y social. En este caso el

proceso buscaba efectuar una consulta internacional sobre el impacto del ajuste estructural, de las políticas que han generado descontento tanto en los países acreedores como en los deudores.

En México el ejercicio se desarrolló en paralelo al proyecto de investigación "Empleo, pobreza y distribución del ingreso en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit" y se caracterizó por la organización de encuentros con OSC. Con base en una metodología participativa, esos talleres permitieron: recoger y analizar la percepción de la sociedad civil acerca de la evolución de las condiciones de vida y de trabajo de grupos sociales y profesionales determinados, y proponer herramientas para la construcción de propuestas alternativas de ajuste estructural. Con esa doble dimensión, analítica y didáctica se intercambiaron saberes académicos y pragmáticos valorando información tanto cualitativa como cuantitativa en una reflexión colectiva sobre un nuevo modelo de desarrollo. Así, se plantearon los fundamentos para que se instaurara un diálogo constructivo entre la sociedad civil, representada por las OSC, y las instituciones políticas en los ámbitos local, nacional e internacional.

Participantes a los talleres Occidente

Organizaciones de la sociedad civil	
Acción Ciudadana para la Educación, el Desarrollo y la Democracia (ACCEDDE, A.C.), Jalisco Asociación Rural de Interés Campesino, Nayarit Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, Jalisco Asamblea Jalisciense por la Paz, Jalisco Asociación de Derechos Humanos Marcos Castellanos, Ocotlán, Jalisco Caja Popular San Miguel de Mezquitán, Jalisco Campo, A.C., Jalisco Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Jalisco, Michoacán y Nayarit Centro de Desarrollo Económico de Jocotepec, Jalisco Centro de Formación Madre Teresa de Calcuta, Jalisco Centro M. Don Bosco, Jalisco Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal-Guadalajara), Jalisco	Centro Educativo para la tercera Edad Madre Teresa de Calcuta, Jalisco Círculo de Mujeres para y por México, A.C., Jalisco Consejo Técnico de ONG de Jalisco Cooperativa del Parque, S.C.L., Jalisco Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Jalisco Inter-Colonias, A.C., Jalisco Milenio Feminista, Guanajuato Mujeres Revolucionarias de México, Querétaro Pastoral Social, Jalisco Plenitud de Vida, Jalisco Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO/USIJAL, A.C.), Jalisco Red de Asilos, Jalisco Sociedad de Producción Rural (SPR), Jalisco
Miembros de las siguientes universidades	
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jalisco Universidad Autónoma de Nayarit Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad de Guadalajara Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Jalisco Universidad Latina de América, Michoacán

Notas

1. Sitio de Internet oficial de SAPRI: <http://www.igc.org/dgap/saprin>
2. Proyecto ITESO-Simorelos núm. 970303004.
3. El equipo de investigación del proyecto ITESO-Simorelos ya citado y la coordinación de investigación del ejercicio CASA participaron en el conjunto de estos talleres. El Centro de Investigación y Formación Social (CIFS) del ITESO apoyó la realización del taller Occidente.
4. La recuperación de los resultados de los talleres fue realizada por los responsables del taller Occidente y por el equipo de capacitación del ejercicio CASA-México. De ahí tomamos lo que aquí se presenta.
5. Resultados del Foro Nacional SAPRI-CASA que se desarrolló los días 24 y 25 de agosto de 1998 en la ciudad de México.
6. Cabe señalar que algunas de estas afirmaciones no siempre coinciden con la evaluación de los resultados de los programas. Por ejemplo, una de las principales críticas al Progreso, que no tiene como papel atender grupos en pobreza extrema, en realidad se refieren a la inexistencia de políticas que frenen los procesos de empobrecimiento.
7. No se identificaron la crisis de 1982, las devaluaciones, la inflación (100% en 1982 y 80% en 1983) ni la duplicación del desempleo en 1982.
8. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC/ Ejercicio de evaluación ciudadana del ajuste estructural, CASA. *El desbarajuste en México*, Guadalajara, 2000.
9. Resumen del capítulo II "Concepciones y diseños de políticas de ajuste estructural", del libro *¿Qué es el ajuste estructural? Racionalidad e irracionalidad de las políticas*

económicas de libre mercado, de Luis Ignacio Román Morales (ITESO, Guadalajara, 1999, pp. 39-90).

10. El municipio de Cuquío se ubica en el nororiente de Jalisco a 150 kilómetros de Guadalajara.
11. El desarrollo de este apartado recupera el trabajo elaborado por María Isabel Verduzco, miembro del equipo de capacitación de CASA.
12. El desarrollo de este apartado recupera el trabajo realizado por Nina Torres, coordinadora del ejercicio CASA-México en el taller Occidente del primer módulo (días 10 y 11 de junio de 2000), con base en el documento "2+2 = 5. Memoria del taller de metodología para el cabildeo" (Constantino Casasbuenas, Germán Dabat y Nina Torres), México, Red Mexicana para el Desarrollo (inédito).
13. El desarrollo de este apartado recupera el trabajo de Enrique Valencia Lomelí, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
14. Referencia al Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid, que no planteaba metas, lo que representó un problema para la evaluación final de la política.
15. Referencia al Pronasol a través de los comités de Solidaridad.
16. Referencia a las políticas de combate a la pobreza contrapuestas a una política de contención salarial extrema, por ejemplo.
17. Referencia a una política fiscal que podría tener como criterio central que cualquier medida de esta política buscara no afectar al nivel de vida de los deciles más pobres de la población y, en caso de que les afectara, buscar mecanismos de compensación.
18. Referencia a un efecto perverso del Progreso pues generó en muchos casos la división de la comunidad y enfrentamientos entre los 80% de atendidos y los 20% no atendidos que se sitúan por arriba de la línea de la pobreza.